



CONVENIO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA
SOBRE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES

EA

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Francesa, denominados a continuación "las Partes Contratantes",

Deseosos de reforzar la cooperación económica entre los dos Estados y de crear condiciones favorables para las inversiones peruanas en Francia y francesas en el Perú,

Convencidos que el incentivo y la protección de estas inversiones tienden a estimular las transferencias de capitales y de tecnología entre ambos países, en el interés de su desarrollo económico.

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Para la aplicación del presente Convenio:

- (1) El término "inversión" designa todos los activos tales como bienes, derechos e intereses de toda naturaleza y, en particular, aunque no exclusivamente:
 - (a) Los bienes muebles e inmuebles, así como todo otro derecho real tales como las hipotecas, privilegios, usufructos, fianzas y derechos similares;
 - (b) Las acciones, primas de emisión y otras formas de participación, sean minoritarias o indirectas, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes;
 - (c) Las obligaciones, acreencias y derechos a toda prestación que tenga valor económico;
 - (d) Los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales), los procedimientos técnicos, los nombres registrados y la clientela;
 - (e) Las concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato, especialmente las concesiones relativas a la prospección, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales, incluso aquellas que se encuentran en el área marítima de las Partes Contratantes.

Dichos activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en el área marítima en la cual la inversión es efectuada, antes o después de la entrada en vigencia del presente Convenio.

Toda modificación de la forma de inversión de los activos no afecta su calificación de inversión, siempre que esta modificación no sea contraria a la legislación de la Parte Contratante en el territorio o en la zona marítima en la cual la inversión es efectuada.

- (2) El término "nacionales" designa toda persona física que posee la nacionalidad de una de las Partes Contratantes.
- (3) El término "sociedades" designa toda persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes conforme a la legislación de esta Parte y que posee allí su sede social, o controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes Contratantes, o por personas jurídicas que poseen su sede social en el territorio de una de las Partes Contratantes y constituidas conforme a la legislación de esta Parte.
- (4) El término "ganancias" designa todas las sumas producidas por una inversión y, en particular, aunque no exclusivamente, los beneficios, los intereses, las utilidades, los dividendos, las regalías y las comisiones.

Las ganancias de la inversión y, en caso de reinversión, las ganancias de su reinversión, gozan de la misma protección que la inversión.

- (5) El presente Convenio se aplica al territorio de cada Parte Contratante y al área marítima adyacente a la costa de cada Parte Contratante hasta el límite de doscientas millas.

ARTICULO 2

Cada una de las Partes Contratantes admite e incentiva, en el marco de su legislación y de las disposiciones del presente Convenio, las inversiones efectuadas por los nacionales y las sociedades de otra Parte Contratante en su territorio y área marítima.

ARTICULO 3

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a asegurar, en su territorio y área marítima, un tratamiento justo y equitativo, conforme a los principios del Derecho Internacional, a las inversiones de los nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante, de modo que el ejercicio del derecho así reconocido no sea obstaculizado ni de hecho ni de derecho.

En particular, cada una de las Partes Contratantes se compromete a no imponer ninguna restricción a la compra o al transporte de materias primas y de materias auxiliares, de energía y de combustible, de medios de producción y de explotación de todo género, ni ningún obstáculo a la venta y al transporte de los productos al interior del país y al extranjero, así como a no tomar ninguna otra medida que tenga un efecto análogo.

Las Partes Contratantes examinarán con buena voluntad, en el marco de su legislación, las solicitudes de entrada y de autorización de estadía, de trabajo y de circulación presentadas por nacionales de una Parte Contratante, por concepto de una inversión realizada en el territorio y en el área marítima de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 4

Cada Parte Contratante otorga, en su territorio y en su área marítima, a los nacionales o a las sociedades de la otra Parte, en lo que concierne a sus inversiones y actividades ligadas a estas inversiones, un tratamiento no menos favorable que aquél acordado a sus nacionales o sociedades, o el tratamiento acordado a los nacionales o a las sociedades de la Nación más favorecida, si éste último es más favorable. A este respecto, los nacionales autorizados a trabajar en el territorio y en el área marítima de una de las Partes Contratantes gozarán de las facilidades materiales apropiadas para el ejercicio de sus actividades profesionales.

Sin embargo, este tratamiento no se extiende a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de un tercer Estado, en virtud de su participación o de su asociación en una zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común o cualquier otra forma de organización económica regional.

Las disposiciones de este artículo no se extienden a los asuntos tributarios.

ARTICULO 5

- (1) Las inversiones efectuadas por nacionales o sociedades de una Parte Contratante gozarán de una amplia y plena protección y seguridad en el territorio y en el área marítima de la otra Parte Contratante.

EA -

- (2) Las Partes Contratantes no adoptarán medidas de expropiación o de nacionalización o cualquier otra medida cuyo efecto sea privar, directa o indirectamente, a los nacionales y sociedades de la otra Parte Contratante de las inversiones que les pertenecen en su territorio y área marítima, a menos que sea por causa de utilidad pública y a condición que estas medidas no sean discriminatorias, ni contrarias a un compromiso particular de una de las Partes Contratantes con los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante.

Las medidas de expropiación que podrían ser adoptadas darán lugar al pago de una indemnización pronta y adecuada cuyo monto, equivalente al valor real de las inversiones afectadas, será determinado en base a una situación económica normal y anterior a toda amenaza de expropiación.

Esta indemnización, su monto y sus modalidades de pago serán fijadas a más tardar en la fecha de la expropiación. Será efectivamente realizable, pagada sin demora y libremente transferible. Ella producirá, hasta la fecha de su pago, intereses calculados a la tasa de interés de mercado aplicable.

- (3) Los nacionales o las sociedades de una de las Partes Contratantes, cuyas inversiones hubieran sufrido pérdidas ocasionadas por guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o revuelta ocurridos en el territorio y en el área marítima de la otra Parte Contratante, gozarán, de parte de ésta última, un tratamiento no menos favorable que aquél acordado a sus propios nacionales o sociedades o a los nacionales o sociedades de la Nación más favorecida.

ARTICULO 6

Cada Parte Contratante, en cuyo territorio o área marítima se hayan efectuado inversiones por nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, permitirá a dichos nacionales o sociedades la libre transferencia de:

- a) los intereses, dividendos, utilidades y otros ingresos;
- b) las regalías derivadas de los derechos de propiedad industrial designados en el párrafo 1, letras d) y e) del artículo 1;
- c) los pagos efectuados para el reembolso de los préstamos contraídos;
- d) el producto de la venta o de la liquidación total o parcial de la inversión, incluidas las ganancias del capital invertido;

- e) las indemnizaciones por expropiaciones o pérdidas previstas en el artículo 5, párrafos 2 y 3.

Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio o en el área marítima de la otra Parte Contratante, en virtud de una inversión acordada, serán igualmente autorizados a transferir sus ingresos a su país de origen.

Las transferencias indicadas en los párrafos precedentes serán efectuadas sin demora, a la tasa de cambio normal oficialmente aplicable en la fecha de la transferencia.

ARTICULO 7

En el caso que la legislación de una de las Partes Contratantes contenga una garantía para las inversiones efectuadas en el extranjero, esta garantía podrá ser otorgada, después de una evaluación caso por caso, a las inversiones realizadas por nacionales o sociedades de esta Parte Contratante en el territorio o en el área marítima de la otra Parte Contratante.

Las inversiones de los nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes realizadas en el territorio y en el área marítima de la otra Parte Contratante sólo podrán obtener la garantía indicada en el párrafo anterior si aquéllas han obtenido previamente el acuerdo de esta última Parte, si tal acuerdo es necesario.

ARTICULO 8

- (1) Toda controversia relativa a una inversión entre una Parte Contratante y un nacional o sociedad de la otra Parte Contratante será amigablemente dirimida entre las partes en la controversia.
- (2) Si tal controversia no hubiese podido ser solucionada en un plazo de seis meses a partir del momento en que cualquiera de las partes en la controversia la hubiera planteado, será sometida, a pedido de cualquiera de las partes, al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por la Convención para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, firmada en Washington el 18 de marzo de 1965.

- (3) Una persona jurídica constituida en el territorio de una de las Partes Contratantes y que antes del surgimiento de la controversia estuviera controlada por los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante será considerada, para los efectos del artículo 25 (2) (b) de la Convención mencionada en el párrafo (2) anterior, como sociedad de esa otra Parte Contratante.
- (4) Cada Parte Contratante otorga su consentimiento incondicional para someter las controversias al arbitraje internacional, de conformidad con las disposiciones de este artículo.
- (5) El laudo arbitral será definitivo y obligatorio.

ARTICULO 9

Si una Parte Contratante efectúa pagos a uno de sus nacionales o sociedades, en virtud de una garantía otorgada a una inversión realizada en el territorio o en el área marítima de la otra Parte Contratante, la primera Parte mencionada tendrá, en ese caso, todos los derechos de subrogación respecto a los derechos y acciones de ese nacional o sociedad.

Dichos pagos no afectan los derechos del beneficiario de la garantía a recurrir al CIADI o a proseguir los procedimientos sometidos a éste hasta su culminación.

ARTICULO 10

Las inversiones que han sido objeto de un compromiso especial entre una de las Partes Contratantes con nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante serán regidas, sin perjuicio de las disposiciones del presente Convenio, por los términos de este compromiso, en la medida en que contenga disposiciones más favorables que las previstas en el presente Convenio.

ARTICULO 11

- (1) Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o a la aplicación del presente Convenio serán solucionadas, si es posible, por la vía diplomática.

- (2) Si en el plazo de seis meses a partir del momento en que la controversia haya sido presentada por una u otra de las Partes Contratantes, ésta no ha sido arreglada, será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.
- (3) Dicho tribunal estará constituido, para cada caso particular, de la siguiente manera: cada Parte Contratante designa un miembro, y los dos miembros designarán, de común acuerdo, a un nacional de un tercer Estado, quien será nombrado Presidente por las dos Partes Contratantes. Todos los miembros deben ser nombrados en un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en que una de las Partes Contratantes ha hecho conocer a la otra Parte su intención de someter la controversia a un arbitraje.
- (4) Si los plazos fijados en el párrafo (3) precedente no han sido observados, cualquiera de las Partes Contratantes, en ausencia de otro acuerdo, invitará al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas a proceder a las designaciones necesarias. Si el Secretario General fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si, por otra razón, estuviese impedido de ejercer esta función, el Secretario General Adjunto más antiguo y que no posea la nacionalidad de una de las Partes Contratantes procederá a efectuar las designaciones necesarias.
- (5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Estas decisiones serán definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

El tribunal establecerá sus propias reglas de procedimiento. Interpretará el laudo a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes. A menos que el tribunal no disponga algo distinto, de acuerdo con circunstancias especiales, los gastos del procedimiento arbitral, incluidos los honorarios de los árbitros, serán distribuidos en partes iguales entre las Partes Contratantes.

ARTICULO 12

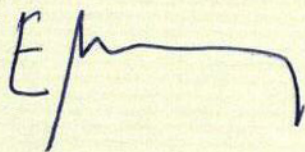
Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los procedimientos constitucionales requeridos para la entrada en vigencia del presente Convenio, el cual entrará en vigor un mes después del día de la recepción de la última notificación.

El presente Convenio estará en vigencia por un período inicial de quince años. Permanecerá en vigor después de este plazo, a menos que una de las Partes Contratantes no lo denuncie por la vía diplomática, con una anticipación de un año.

En caso de expiración del período de validez del presente Convenio, las inversiones efectuadas durante la vigencia de éste, continuarán gozando de la protección de sus disposiciones durante un período adicional de quince años.

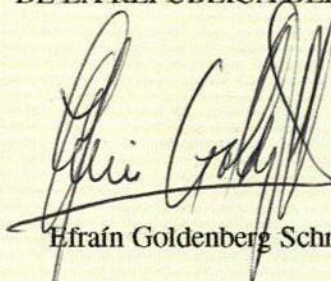
HECHO en la ciudad de París, el día 6 de octubre de 1993, en dos ejemplares cada uno en idioma castellano y francés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA FRANCESA

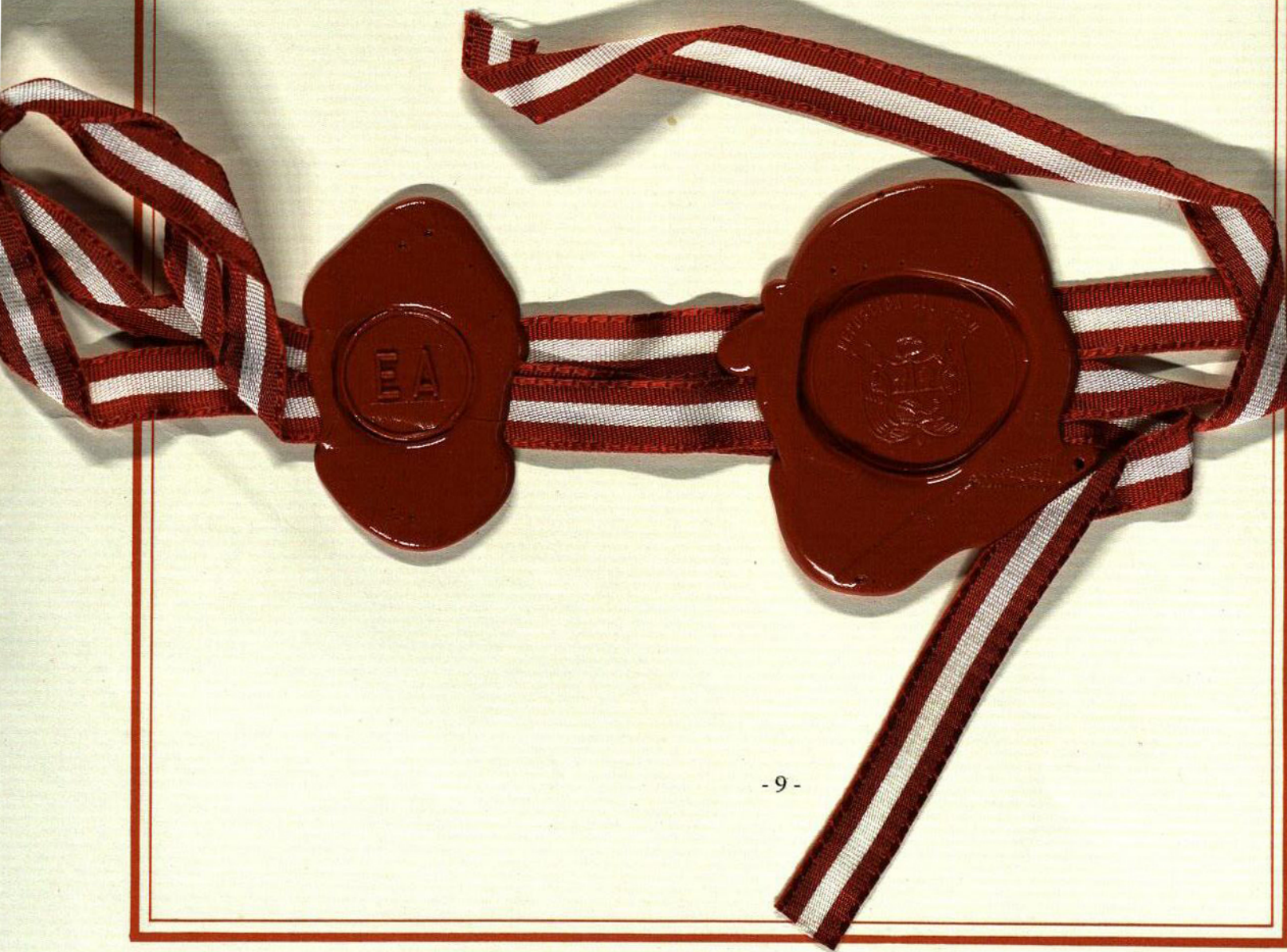


Edmond Alphandéry

POR EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DEL PERU



Efraín Goldenberg Schreiber



ACCORD

**ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS**

EL

Le Gouvernement de la République du Pérou et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés "Les Parties contractantes",

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements péruviens en France et français au Pérou,

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Pour l'application du présent Accord :

1. Le terme "investissement" désigne tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;

b) les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;

c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;

e) les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.

Lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.

2. Le terme de "nationaux" désigne toute personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes.

3. Le terme de "sociétés" désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

4. Le terme de "revenus" désigne toutes les sommes produites par un investissement, et plus particulièrement, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances et les commissions.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

5. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes et à la zone maritime adjacente aux côtes de chacune des Parties contractantes dans la limite de deux cents milles marins.

ARTICLE 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.

ARTICLE 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

En particulier, chacune des Parties contractantes s'engage à n'imposer aucune restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, de moyens de production et d'exploitation de tout genre, ni aucune entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi qu'à ne prendre aucune autre mesure ayant un effet analogue.

Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.

ARTICLE 4

Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

ARTICLE 5

1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard d'un national ou d'une société de l'autre Partie contractante.

Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace de dépossession.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché approprié.

3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

ARTICLE 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

- a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
- b) des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d) et e) de l'Article 1 ;
- c) des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
- d) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
- e) des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'Article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.

ARTICLE 7

Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.

Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie, si un tel agrément est nécessaire.

ARTICLE 8

1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.

2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.

3. Une personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui, avant que le différend ne soit soulevé, est contrôlée par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie contractante est considérée pour l'application de l'article 25(2)(b) de la Convention mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus comme une société de l'autre Partie contractante.

4. Chacune des Parties contractantes donne son accord sans réserve au règlement des différends par recours à l'arbitrage international conformément aux dispositions de cet article.

5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires.

ARTICLE 9

Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

ARTICLE 10

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.

ARTICLE 11

1. Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.

Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

ARTICLE 12

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de quinze ans.

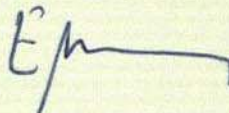
Fait à Paris, le 6 octobre 1993
en deux originaux, chacun en langue
espagnole et en langue française,
les deux textes faisant également foi.

**Pour le Gouvernement
de la République du Pérou**



Efraim Goldenberg

**Pour le Gouvernement
de la République Française**



Edmond Alphandéry

